



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
UNIDAD JURÍDICA

REF.: Nº W6595/21  
CHT

**SOBRE LA CALIDAD DE PARTE  
INTERESADA EN EL PROCEDI-  
MIENTO DE RECLAMACIÓN DE  
QUE SE TRATA.**

---

SANTIAGO,

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Patricio Herman Pacheco, en representación de la Fundación “Defendamos la Ciudad”, solicitando un pronunciamiento en relación con la legalidad del oficio Nº 585, de 2021, por medio del cual la Secretaría Regional Ministerial de Viviendo y Urbanismo de la Región Metropolitana (SEREMI), le denegó la calidad de parte en el procedimiento administrativo que se sustancia, con ocasión de la reclamación interpuesta por la empresa Desarrollos La Dehesa SpA, en contra de la paralización de las obras del proyecto “Chaguay”, decretada por la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Lo Barnechea (DOM).

Sostiene el recurrente, que para los efectos descritos, su representada invocó lo dispuesto en el artículo 21, Nº 3, de la ley Nº 19.880, considerando que, de prosperar la reclamación formulada por la empresa Desarrollos La Dehesa SpA ante la aludida SEREMI, en contra de la paralización de las obras que pretende ejecutar esa compañía, y que había sido dispuesta por la DOM de la comuna de Lo Barnechea, podrían afectarse derechos colectivos en un área de protección ecológica, por tratarse de una zona rural.

Adicionalmente al reconocimiento de su calidad de parte interesada, requiere un pronunciamiento en relación con los posibles incumplimientos a la normativa legal y reglamentaria del proyecto en cuestión, el que carecería de permiso o autorización de los organismos públicos competentes.

Requerida al efecto, la aludida SEREMI informó, en síntesis, que se denegó la calidad de interesado al recurrente por cuanto no acreditó, en los términos previstos en la normativa y jurisprudencia aplicables, tener un derecho subjetivo o interés específico, además de concreto y directo respecto de la materia que se impugna, y que pudiese afectarse con el procedimiento de que se trata.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) -aprobada por el decreto con fuerza de ley Nº 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, dispone, en lo que interesa, que a la citada cartera le corresponde, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial.

**AL SEÑOR  
SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO  
DE VIVIENDA Y URBANISMO  
PRESENTE**

A su vez, y en relación con el procedimiento de reclamación previsto para activar la competencia de tales Secretarías Regionales Ministeriales, el artículo 12 de la normativa en examen establece, en lo pertinente, que la SEREMI correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá resolver las reclamaciones de las resoluciones dictadas por los Directores de Obras. El reclamo podrá ser interpuesto en el plazo de 30 días, contados desde la notificación administrativa del reclamante, aplicándose el procedimiento previsto en el artículo 118 de dicha preceptiva.

Por su parte, el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 19.880 -que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado- prevé, en lo que importa, que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria, lo que ocurre en el caso de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) -aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo- (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 53.303, de 2007, y 12.926, de 2016).

Agrega el inciso primero del artículo 10 de dicha preceptiva, a propósito del principio de contradictoriedad, que los interesados en el procedimiento podrán, en cualquier momento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

En ese mismo sentido, la letra f) de su artículo 17 de la ley N° 19.880 reconoce, entre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, el de formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

A su vez, los numerales 2 y 3, del artículo 21 de la preceptiva en examen, disponen que también son interesados en el procedimiento administrativo, los que, sin haber iniciado este, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y a aquellos cuyos intereses, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución, y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Al respecto, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 86.712, de 2015, y 17.793, de 2019, ha precisado que la aplicación supletoria de la ley N° 19.880 procede en cuanto ella sea conciliable con la naturaleza del respectivo procedimiento especial, toda vez que su objetivo es solucionar los vacíos que éste presente, sin que pueda afectar o entorpecer el normal desarrollo de sus etapas.

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que mediante el oficio N° 585, de 21 de febrero de

2021, la SEREMI denegó la calidad de interesado invocada por el recurrente, en base a la representación que invoca, solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, N° 3 de la citada ley N° 19.880. Ello, en el marco del procedimiento de reclamación iniciado ante la aludida SEREMI, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 12° y 118° de la LGUC, en contra de la resolución de la DOM de la Municipalidad de Lo Barnechea, que dispuso la paralización de todas las obras asociadas al denominado “Proyecto Chaguay”, en esa comuna.

Lo anterior, por cuanto no acreditó tener un derecho o interés específico y concreto del cual pueda ser titular la fundación respecto de la cual el interesado invocó representación, sin que haya podido verificarse la forma en que puede verse afectado el interés colectivo al que hace mención, como tampoco respecto del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 22 de la ley N° 19.880, en lo que se refiere a la actuación por medio de apoderados.

En dicho contexto, cabe señalar que efectivamente la LGUC contempla un procedimiento especial de reclamación en contra de las decisiones administrativas que se adopten por la DOM, sin que se advierta de sus disposiciones, alguna normativa específica que regule la intervención de terceros, como tampoco la existencia de alguna definición del término “interesado” (aplica criterio contenido en el dictamen N° 17.793, de 2019).

En ese ámbito, y siendo la intención del legislador no restringir la participación de las personas durante el procedimiento administrativo, pudiendo estas dirigirse a las autoridades con el objeto de plantear solicitudes de cualquier naturaleza y en cualquier etapa, a fin de aportar antecedentes o hagan presente los elementos de juicio que estimen pertinentes para que la autoridad adopte una mejor resolución, cabe concluir que respecto de la calidad de interesado en el procedimiento de la LGUC resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 22 N° 3 de la ley N° 19.880 (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 52.077, de 2015, y 17.793, de 2019).

En base a ello, y en tanto la calidad de interesado que invocó el recurrente, en la representación que dice invertir, no pudo ser acreditada en su oportunidad, es dable precisar que, en lo sucesivo, dicha condición podría ser revisada en base a los antecedentes que puedan aportarse en el procedimiento de que se trate y hasta tanto no se dicte resolución ejecutoriada en el mismo, en base a los cuales pudiere acreditar una afectación directa a intereses colectivos.

Lo anterior, considerando que la citada ley N° 19.880 contempla normas que suponen la existencia de un rol activo por parte de los interesados y le entrega a la autoridad el deber de velar por el debido respeto al principio de contradictoriedad de estos, debiendo recibir los antecedentes que se presenten, incorporándolos al expediente administrativo y ponderándolos en su decisión (aplica criterio contenido en el dictamen N° 17.793, de 2019).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO  
UNIDAD JURÍDICA

4


Finalmente, en cuanto al pronunciamiento que solicita el recurrente, respecto de posibles incumplimientos a la normativa legal y reglamentaria en el proyecto de que se trata, se debe señalar que ello no es posible efectuar en esta oportunidad, por cuanto la materia está siendo conocida por el organismo competente para ello, sin que conste que exista pronunciamiento definitivo sobre el particular.

Lo anterior no obsta a las facultades fiscalizadoras que competen a esta entidad de control respecto de la juridicidad de las decisiones que adopte la autoridad administrativa, las que, sin embargo, corresponde que sean ejercidas una vez agotada la antedicha instancia, específicamente en lo que atañe a la competencia que tiene esta Entidad de Control para pronunciarse sobre la correcta aplicación e interpretación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza General (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 39.833, de 2001, y 26.505 y 29.822, ambos de 2017).

Saluda atentamente a Ud.,

DISTRIBUCIÓN:

- Al señor Patricio Herman Pacheco (patricioherman@hotmail.com).

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Firmado electrónicamente por: |   |  |
| Nombre                        | CARLOS ALBERTO FRIAS TAPIA  |   |
| Cargo                         | CONTRALOR REGIONAL  |   |
| Fecha firma                   | 20/08/2021  |   |
| Código validación             | n1AyAeKa7   |   |
| URL validación                | <a href="https://www.contraloria.cl/validardocumentos">https://www.contraloria.cl/validardocumentos</a> |   |